

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medellín, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501720130154702, promovido por la señora **ALIS MARICELA RUIZ FERNÁNDEZ** en contra de **EL ARPE Y CIA. LTDA. Y LA SEÑORA LUZ MARINA RESTREPO PÉREZ** con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el siete (7) de marzo del año dos mil diecisiete (2017).

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto

Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **077**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La demandante instauró acción judicial pretendiendo que se declare que laboró al servicio de las demandadas entre el trece (13) de enero de dos mil seis (2006) y el nueve (9) de octubre del año dos mil trece (2013), y que su despido se dio de manera unilateral e injusta, por lo cual, solicita el pago de la indemnización del artículo 64 del C.S.T. modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 indexada. Igualmente, que se declare que las liquidaciones de las cesantías efectuadas por las demandadas constituyeron un pago de lo no debido, porque el contrato de trabajo no había terminado y se ordene su pago íntegro, así como el pago de los intereses a las cesantías por el tiempo laborado y doblado por la extemporaneidad, las primas de servicio, vacaciones, indemnización moratoria, sanción del artículo 99 de la ley 50 de 1990. Solicitó se declarara que el suceso sufrido el 12 de diciembre del año 2011 fue un accidente laboral, se le paguen las incapacidades causadas y la indemnización por la pérdida de capacidad laboral, así como los salarios dejados de reconocer durante el primero de julio del año dos mil trece y la fecha de desvinculación, lo ultra y extra petita probado en el proceso y las costas del mismo.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que, laboró con la señora Luz Marina Restrepo desde el 13 de enero del año dos 2006 en oficios varios en el

inmueble de su empleadora, donde, además, funciona la empresa EL ARPRE, devengando el salario mínimo legal. Comentó que para el 12 de diciembre del año 2011 sufrió una caída en su lugar de trabajo, que le ocasionó una lesión sobre la rodilla izquierda por la que estuvo incapacitada como beneficiaria de su ex compañero, pues no se encontraba afiliada a la seguridad social. En atención a ello, expuso que sus empleadores realizaron ciertas irregularidades, haciéndole suscribir documentos denominados liquidaciones definitivas de servicios prestados en donde se enunciaban rubros y pagos que no se compadecían con la realidad. Que se suscribió un contrato de trabajo con la sociedad EL ARPRE para el cargo de auxiliar de oficios varios, señalando como fecha de vinculación el 18 de diciembre del año 2011 procediendo con la afiliación en seguridad social, sin embargo, para dicha fecha se encontraba incapacitada e imposibilitada para trabajar. Enunció que desde la fecha en que se hizo aparecer como empleador a la sociedad codemandada, se le canceló en forma oportuna a la demandante las cesantías, intereses, vacaciones, y primas de servicios a las que tenía derecho, así como los aportes a la seguridad social. Argumentó que desde el 28 de mayo del año 2012 fue incapacitada por “enfermedad general” y la E.P.S. reembolsó las incapacidades respectivas desde el 29 de mayo del año 2012 hasta el 12 de diciembre del año 2012 que fueron pagadas en su momento. La pasiva, pagó las incapacidades desde el 13 de diciembre de 2012 y hasta el 11 de julio del año 2013 con el argumento que, los siguientes debían ser abonados por las entidades de seguridad social, ocasionando la ausencia del pago del salario desde dicha fecha, así las cosas, interpuso acción constitucional que amparó los derechos. Para el 8 de octubre del año 2013 Colpensiones calificó la pérdida de capacidad laboral con un 22.68%, dictamen que fue recurrido por la trabajadora. Finalmente expuso que, fenecidas las incapacidades, se presentó a trabajar, pero fue despedida el 9 de octubre del año 2013.

Admitida la demanda, y notificadas, las accionadas dieron respuesta de la siguiente manera:

Las accionadas, mediante apoderada judicial contestaron el libelo petitorio, la cual, exhibió que, en efecto inicialmente la señora Luz Marina Restrepo Pérez contrató a la demandante para el servicio doméstico de su hogar por dos días, martes y jueves y otras semanas martes, jueves y sábado, por lo que se le cancelaba \$20.000 pesos diarios y posteriormente \$30.000, pero en los diciembres de cada año se le pagaba con base al salario mínimo legal mensual vigente y se le daba la liquidación anual. Para ese momento no funcionaba la empresa el ARPRE LTDA. allí, y la demandante trabajaba el resto de días en otras casas, no siendo cierto que la caída hubiera ocurrido en la prestación del servicio con la codemandada, y explicó que no se encontraba afiliada a seguridad social porque sólo trabajaba dos o tres días a la semana, así mismo nunca se le hizo firmar nada en contra de su voluntad. Expuso que es cierta la renuncia presentada por la demandante en el servicio con la señora Restrepo Pérez y posterior vinculación con el ARPRE LTDA. Reveló que la demandante tuvo un accidente de trabajo para el 3 de mayo del año 2012 debidamente reportado cuya investigación concluyó en una enfermedad profesional, siendo incapacitada desde el 3 al 5 de mayo del año 2012 y del 29 de mayo de 2012 al 5 de octubre del año 2013 fecha en la que fue intervenida quirúrgicamente. Explicó que toda vez que no se presentó a laborar, se dio por terminada la relación laboral con justa causa. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones que denominó: “Pago”, “Inexistencia de la obligación”, “Temeridad y mala fe”, “Petición de lo no debido”, “Compensación”, “Buena Fe por parte del demandado”, “La genérica”.

En sentencia proferida el siete (7) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, declaró que fueron dos relaciones laborales diferentes, con la señora Luz Marina Restrepo Pérez se dio entre el 13 de enero del año 2006 y el 18 de diciembre del año 2011 terminando por justa causa por parte de la trabajadora, ordenándose a la demandada al pago de: auxilio de cesantías, intereses a cesantías, vacaciones, indemnización por despido injusto y al pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del CST desde el 18 de diciembre del año 2011 hasta el 18 de diciembre del año 2013 y desde el 19 de diciembre del año 2013 los intereses moratorios contenidos en el artículo 65 del CCST Y SS, así como al pago de los aportes en seguridad social en pensiones. Se declaró que por el año 2006 la demandante trabajó por días y desde el año 2007 tiempo completo.

Respecto a la El ARPRE y Cía. Ltda. declaró la existencia de una relación laboral entre el 19 de diciembre del año 2011 al 9 de octubre del año 2013 el cual, termino sin justa causa, ordenando a pagar la indemnización debida indexada desde el 9 de octubre del año 2013 y absolvió de los demás conceptos.

RECURSO INTERPUESTO

El apoderado de la parte actora manifestó su inconformismo con la decisión de no declarar una sola relación laboral, basándose en que siempre laboró con las mismas funciones en el mismo lugar y a favor de la señora Luz Marina Restrepo y/o El ARPRE Y CIA. LTDA. Argumenta que, debió condenarse a la sanción por la no consignación oportuna de las cesantías, pues sí se probó la mala fe de la demandada al no consignar nunca las cesantías en un fondo. Solicita que, los intereses moratorios versen también sobre los aportes a la seguridad social dejados de

realizar. Igualmente, solicita se declare que el accidente de la demandante lo fue de origen laboral, pues de manera irregular se hizo suscribir a la demandante unas liquidaciones de prestaciones sociales y un contrato de trabajo para poderla afiliar a la seguridad social todo esto con la omisión del reporte del accidente. En atención a ello, solicita que se condene de manera solidaria a EL ARPRES LTDA. y se ordene el pago de las incapacidades que le generan una pérdida de capacidad laboral probada en el proceso.

El extremo pasivo interpuso recurso de alzada, indicando que la sentencia debe ser proferida con la razón y no con el corazón, ya que el testigo, señor “Darío” tuvo varias inconsistencias en su deponencia y pese a ello se le dio validez, así mismo, la demandante negó haber presentado la renuncia y la señora Juez se paró y le mostró que efectivamente si lo había hecho. Argumenta que en el interrogatorio de parte de la demandante se pudo ver su mala fe al presentarse a laborar en un lugar diferente y negarse a aceptar la renuncia presentada. Se encuentra en desacuerdo con que se dio por demostrado que la demandante no recibió los dineros por los que firmó recibo, pues se pudo haber negado a suscribir los documentos que alega tal y como lo hizo con la carta de despido, igualmente enuncia que a la demandante no se le pagaron incapacidades porque no estaba incapacitada, y en los momentos en los que sí lo estuvo recibió doble pago, por la E.P.S. y por parte de la empresa. Expresa que se ordenó el pago de la indemnización por despido sin justa causa la que se ordenó por parte de El ARPRES y por la señora Luz Marina, pero, ello no fue solicitado en la demanda. Expresó que la liquidación para personas que trabajan por días debe realizarse sobre el salario mínimo y no sobre el salario que devengaban día, y en la liquidación efectuada por el despacho se hizo desde el año 2007 por el año completo y no por días. Solicita se revoque íntegramente la sentencia proferida.

Corrido el traslado para alegar, las partes no hicieron manifestación alguna.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta instancia, de acuerdo a los recursos interpuestos consiste en determinar, si existió una sola vinculación laboral entre las partes, si la sentencia de primera condenó al pago de una indemnización que no fue solicitada por la parte actora. Si se adeuda a la demandante los rubros indicados en la demanda, que dice no haber recibido pese a la firma de los documentos, y si es procedente la indemnización moratoria respecto al pago de los aportes en seguridad social, así como si es procedente declarar que el accidente sufrido por la demandante fue de origen laboral, dando lugar al pago de incapacidades por ello.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo, y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba al demandado cuando éste se opone o excepciona aduciendo

en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado (sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

En voces de la Corte (CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779) se explicó así:

«De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado»

La parte demandante no puede limitarse a enunciar de carácter asertivo lo pretendido, solicitando se active el principio de la carga dinámica de la prueba, pues ello, se aplica de acuerdo a la particularidad de cada proceso, en los que, ante la dificultad de la prueba, es posible la inversión de dicha carga a favor del extremo activo, imponiendo a cualquiera de las partes la prueba de los supuestos que amparen los fundamentos fácticos enunciados. A pesar de ello, no se deja de lado que en un principio es la demandante y no otra, quien sobre sus hombros debe traer al proceso los elementos probatorios que, calificados en conjunto por el fallador, arriben a la concesión de sus pretensiones, para que, de ser el caso, su contra parte, si posee mejores condiciones de producir la prueba o la tiene a su

alcance, entre a probar, debatir o desvirtuar de manera contundente el hecho afirmado.

Es importante clarificar que la fijación del litigio se dio en torno a establecer si existió o no una sola relación laboral, y quién es el responsable del pago de las acreencias que se endilgan a las pasivas, con la sanción moratoria del artículo 65 del CST y la ley 50 de 1990, la declaratoria o no de un accidente laboral el 12 de diciembre del año 2011 que dé lugar al pago de las incapacidades que no fueron pagadas por la falta de afiliación, y los salarios dejados de reconocer desde el 1 de julio del año 2013 y la fecha de desvinculación.

Se enuncia en la demanda, que la señora Alis Marisela Ruiz Fernández inició el 13 de enero del año 2006 a laborar con la señora Luz Marina Restrepo Pérez, hecho que es aceptado, más se indica que la relación tuvo lugar por días, inicialmente martes y jueves y después martes jueves y sábado dependiendo de la necesidad.

Respecto a las empleadas del servicio doméstico estos tienen una especial protección conforme la Ley 1595 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011.

Igualmente, en este tipo de relaciones laborales, la carga de la prueba que recae en los trabajadores, según precisó la sentencia de radicación N° 42.167 del 6 de marzo de 2012, MP. Dr. CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE, la H, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, es la siguiente:

“Como consideraciones de instancia, a más de las expresadas al estudiar el cargo, recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no releva al demandante de otras cargas probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos trascendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros”.

El Decreto 824 de 1998 definió en el ordenamiento jurídico la noción de trabajador del servicio doméstico, así:

“Artículo 1º Entiéndase por trabajador del servicio doméstico, la persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa, de manera habitual, bajo continuada subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar del trabajo, a una o a varias personas naturales, en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, PLANCHADO, vigilancia de niños y demás labores inherentes al hogar. Para efectos del presente reglamento se denominarán "internos", los trabajadores que residan en el lugar o sitio de trabajo. Los demás, se denominarán "por días".

Convenio 189 de la OIT de 2011: Aprobado por Colombia en la Ley 1595 de 2012: define así los trabajadores del servicio doméstico:

a) La expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos;

(b) La expresión trabajador doméstico designa a toda persona, de género femenino o género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo;

(c) Una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico.

Este análisis tiene relevancia, por cuando recae en el trabajador la prueba de los días en los que se prestaba el servicio, conforme a lo que se indica, éste puede ser de manera continua o por días, es así como una certificación salarial puede no ser igual sobre toda la relación laboral, precisamente a la naturaleza del vínculo que se refiere, cuando es una labor por días.

De la prueba recaudada en el proceso se constata lo siguiente:

- Con fecha 1 de diciembre del año 2011 reposa constancia laboral expedida por la señora Luz Marina Restrepo en donde enuncia que la señora Alis Marcela Ruiz Fernández labora desde el 13 de enero del año 2006, bajo la modalidad de prestación de servicios en el cargo de oficios varios y con una asignación de \$600.000, certificado que se expide para ser presentado a entidad financiera.
- En páginas 14 a -19 reposan liquidaciones de prestaciones sociales de los años 2006 a 2011, en donde firma la señora demandante como recibo de los valores allí descritos, sin embargo, argumenta en el escrito de demanda que no recibió tales valores, pues “le hicieron” firmar los documentos.
- Misiva del 15 de diciembre del año 2011 misiva suscrita por la demandante en donde expresa renunciar al cargo de oficios varios a partir del 16 de diciembre del mismo año, por la no afiliación a la seguridad social, indicando

que trabaja hasta el 20 de diciembre del año 2011 y solicita se le paguen las incapacidades que anexa.

- Escrito de la demandante del 27 de diciembre del año 2011 donde solicita le sean pagados 2 días de incapacidad que se le adeudan.
- Certificado laboral expedido por EL ARPRE y CIA LTDA en donde deja constar que la señora Alis Marisela Ruiz Fernández labora desde el 19 de diciembre de 2011 en el cargo de oficios varios, devengando la suma de \$566.700 más subsidio de transporte. (página 22)
- En página 23 se observa memorándum a la demandante solicitándole allegar para el 28 de diciembre del año 2011, información relativa a las afiliaciones correspondientes a su contrato laboral, que se aportó en página 24 a 26, dando cuenta de la relación laboral desde el 19 de diciembre del año 2011 en el cargo de auxiliar de oficios varios.
- En página 74 reposa carta de terminación del contrato de trabajo sin justa causa desde el 9 de octubre del año 2013.

En audiencia del artículo 80 del CPT y SS se recepcionó la siguiente prueba:

Testimonio del señor Darío de Jesús Betancur expuso: Indicó que él trabajó en el ARPRE desde el año 2005 al año 2012. Que conoció a la demandante en el año 2012, después corrigió que la conoció desde el año 2011, él desempeñaba oficios varios. Supo que la demandante tuvo un accidente “allá”, no supo si en el tiempo que en que trabajó la demandante en EL ARPRE se le pagaron salarios o prestaciones sociales. Insiste que conoció a la demandante cuando empezó a trabajar en EL ARPRE en Laureles al frente de la bomba de los almendros, e indica que la casa de la demandada Luz Marina Restrepo Pérez también quedaba en Laureles, pero en diferente lugar. Visitó la casa de Luz Marina Restrepo Pérez en donde trabajo en oficios varios con la demandante. Dijo que trabajó todos los días

allá y que no dejó de laborar hasta que la sacaron. En la casa de la demandada la demandante hacía aseo. Indica que trabajó un tiempo por días y después a tiempo completo, pero no se acuerda cuando fue. Que la demandante trabajó de manera simultánea en la casa de Luz Marina Restrepo y en la empresa. No sabe cuándo trabajó por días la demandante ni que hacía en los otros días. Explicó que cuando iba a la casa de la señora Luz Marina Restrepo veía trabajando a la demandante, quien entró a trabajar a los seis meses que él estaba trabajando (en esto se contradice respecto a los tiempos dados). Dijo que Marisela siempre trabajó con EL ARPRE, porque en el primer piso estaba la oficina, la gerencia. Luego, dice que la empresa queda en la autopista Medellín Bogotá, pero que la gerencia siempre estuvo en la casa de doña Luz Marina. Deduce que la casa y la empresa son la misma cosa, y que por eso siempre fue trabajadora de EL ARPRE.

Francisco Eladio Osorio Quintero: Conoció a la demandante bajo el nombre de “Mery” en el año 2005 o 2006, en la casa de la demandada Luz Marina Restrepo Pérez. Dijo que no sabe si la demandante estaba de manera continua en la casa de la señora Restrepo Pérez, pues no siempre la vio en la casa de la “arquitecta” (en referencia a la demandada). Sabe que la demandante hacía trabajos del hogar. La empresa está en la autopista Medellín Bogotá. No le consta que en la casa de la señora Restrepo Pérez también haya oficina de la empresa. Sabe que la señora Mery no volvió a trabajar. Se enteró que estuvo incapacitada, se aporreó de una rodilla, pero no le contó cómo. No sabe si se le efectuaron pagos o no. Explicó que los trabajos que lo unieron con la demandada eran esporádicos, que podían perderse un año o dos, luego meses. Desde el año 1992 fue varias veces a la casa de la señora Restrepo Pérez.

Alina María Restrepo Pérez: enunció que llevó la contabilidad de su hermana, (la demandada) desde el año 2005, conoció a la señora demandante desde el año 2006,

quien trabajaba por días y sin horario fijo. Explicó que llegó a hacer cada año la liquidación de prestaciones sociales tanto de la empresa como de la casa, cada año hacía la contabilidad de seguridad social, las vacaciones los días 10 20 de diciembre salían a vacaciones y volvían en enero sin recordar bien qué día. Supo que en el año 2011 la demandante renunció por que no estaba afiliada a la seguridad social ni prestaciones. De ahí pasó a trabajar en EL ARPRE y su hermana le ofreció las garantías de trabajo en la empresa, pero ya en la autopista Medellín Bogotá. Alis no volvió a la casa. Cuando empezó a trabajar a la empresa no sabe si estaba incapacitada. Se terminó el contrato porque terminada la incapacidad no se hizo presente. Desde el año 2005 llevaba la contabilidad de la empresa, las declaraciones de renta y las liquidaciones de prestaciones sociales de su hermana y de la empresa. Las prestaciones sociales se pagaban y se entregaban cada año, según su conocimiento se hacían con fecha del último día del año. Vivió en el año 2010 hasta el año 2011 en la casa de la señora Luz Marina Restrepo Pérez, antes no siempre que iba donde su hermana la veía. Nunca se le obligó a firmar nada a la demandante.

En el interrogatorio de parte de la señora Alis Marisela Ruiz Fernández, conforme al artículo 191 del CGP enunció los siguientes hechos de confesión:

Empezó a trabajar con la señora Luz Marina en septiembre del año 2006, los primeros seis meses 1, 2 o 3 días a la semana. Dijo que sólo tuvo un accidente de trabajo. Expuso que la carta de renuncia (página 20) la presentó, se la ayudó a hacer una ex magistrada de la Corte. Trabajó en Guarne (lugar de la fábrica) 3 meses mientras le autorizaban una cirugía. Le pagaron todas las incapacidades. Reconoció la firma de folios 14 a 19 e informó que correspondía a los pagos que ya se le había efectuado.

La señora Luz Marina Restrepo Pérez demandada en sus dichos, y teniendo en cuenta la misma normativa expresó:

Recibió la misiva en folio 20 (renuncia). Posterior a eso se le propuso trabajar con la empresa EL ARPRE. No recuerda si le había pagado las prestaciones sociales para el momento en que empezó a trabajar con EL ARPRE. La trabajadora tuvo un accidente de trabajo al servicio de EL ARPRE que se deslizó por unas escaleras. La liquidación de prestaciones sociales las elaboraba con la persona que le colabora en la oficina, la señora Alina. Cada año se le liquidaba sobre el salario mínimo. Las liquidaciones se hacen a 31 de diciembre, no necesariamente el día 31 de diciembre. La misma asistente administrativa hacía la liquidación de todos los empleados y las dejaba hechas a 31 de diciembre. Es cierto que nunca afilio a la demandante en un fondo de cesantías. La contratación realizada a la demandante fue verbal. La oficina de la empresa sí estuvo un tiempo en la su misma casa de habitación.

Nótese como de los testimonios recepcionados y de la prueba documental que reposa en el plenario, no se puede constatar que la demandante hubiera laborado todo el tiempo en una única relación laboral con la señora Luz Marina Restrepo Pérez, pues si bien en cabeza de la señora Luz Marina Restrepo Pérez confluye la condición de representante legal de EL ARPRE Y CIA. LTDA., no necesariamente ello confunde ambos fueros en uno solo, pues es claro que para el 15 de diciembre el año 2011 la demandante decidió de acuerdo a sus dichos en el interrogatorio de parte y al documento en página 20 del proceso, no continuar prestando servicios para la señora Restrepo Pérez, empero, si vincularse laboralmente con EL ARPRE, empresa que, contaba con un domicilio diferente y que conforme a página 266 tenía unas connotaciones diferentes en sus funciones.

Comparte la Sala la conclusión arrojada por la a quo respecto a los extremos de la relación laboral en considerar que no se trató de una sola, pues no existen

elementos probatorios que den fe de ello, y se insiste, que no puede confundirse la calidad de la señora Luz Marina Restrepo Pérez como empleadora en la función que desempeña como representante legal de la empresa EL ARPRES Y CIA. LTDA.

Contrario al recurso elevado por la parte demandante se mantendrá la sentencia respecto a la existencia de dos relaciones laborales, una entre el 13 de enero del año 2006 y el 18 de diciembre del año 2011 con la señora Alis Marisela Ruiz Fernández y otra entre EL ARPRES Y CIA LTDA y Alis Marisela Ruiz entre el 19 de diciembre del año 2011 y hasta el 9 de octubre del año 2013, pues del material probatorio no puede colegirse cosa contraria.

Respecto al despido sin justa causa, en la fijación del litigio y ante la manifestación de la parte accionante al aclarar que su pretensión correspondía a que existió una única relación laboral, la *a quo* fijó el litigio (minuto 6:13) en determinar “*cuál de las relaciones laborales o cual de las dos personas demandadas debe responder*”. Siendo la petición la declaración de la finalización de la relación laboral el 9 de octubre del año 2013 de acuerdo a la pretensión primera, y solicitando el pago de la indemnización, se constata que es a ese momento y no otro, que se debe estimar la forma de terminación de dicho vínculo contractual. De acuerdo a la fijación del litigio y las pretensiones invocadas en el libelo petitorio, la finalización de un vínculo contractual para el 18 de diciembre del año 2011 evidentemente no era parte del litigio, y tampoco, si existió o no, un despido indirecto como fue declarado en sentencia, asistiéndole razón a la pasiva apelante, y siendo pertinente la revocatoria de ello.

Conforme a la finalización del 9 de octubre del año 2013 y que tenía lugar con EL ARPRES Y CIA. LTDA., la demandante logró probar con suficiencia el despido con la misiva a folios 74 y 314 del expediente, en donde respecto a la demandante se lee lo siguiente:

“Asunto: TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA

....

Ha decidido cancelar su contrato de trabajo debido a que usted se encontraba incapacitada hasta el 5 de octubre y debió haber avisado a la empresa el 6 del mismo mes la prórroga de su incapacidad o el dictamen médico del reintegro a sus labores. El día de hoy 9 de octubre se presenta con los documentos solicitados a usted en carta del 20 de septiembre de 2013.”

Evidentemente, en manos de la demandada estaba la prueba de la justa causa de la terminación de la relación laboral, para lo cual, allegó misiva, que reposa a folio 313, documento realizado por la demandante, y reconocido en el interrogatorio de parte, en donde expone que el 8/10/2013 siendo las 11:00 am., se presentó en la empresa (oficina) para reportar que se le habían acabado las incapacidades.

Es importante precisar que, de acuerdo a folio 311 del plenario, la incapacidad de la demandante finalizó el día 05/10/2013 es decir, sábado de acuerdo al calendario de dicho año, siendo imperativo que para el lunes 07/10/2013 se presentara a trabajar, sin que así lo hubiere hecho. Empero, al no reincorporarse a laborar sin que mediara una razón para ello, se acarrearía por lo menos a un llamado del empleador a verificar si había justificación en la omisión, máxime, cuando en el lugar al que se presentó en algún momento existió parte de la empresa (oficina), siendo necesario que el empleador efectuara un razonamiento sobre las condiciones en que se dio el ausentismo laboral por ese día, lo cual, no tuvo lugar en el presente caso, pues sin argumentación de fondo se culminó el vínculo contractual, considerándose no probada la justa causa para ello.

Consecuente a lo dicho, le asistió razón a la juez de primera instancia en declarar que la terminación de la relación laboral se dio de manera unilateral e injusta, tal como la misma empleadora lo plasmó en el asunto de la misiva a folio 314.

Respecto a los documentos allegados a folios 14 a 19 y que la demandante enunció en el escrito de demanda que le hicieron suscribir sin el pago de los mismos, es importante hacer claridad en lo siguiente:

La demandante expresa que dichos documentos, de los cuales reconoce con su firma “se los hicieron firmar” y le dijeron que estos valores ya se los habían cancelado. Empero, la señora Alina María Restrepo Pérez, declarante, enunció haber realizado tales liquidaciones, las cuales se hacían siempre con fecha de corte 31 de diciembre de cada año, pues se liquidaba el año completo, entendiéndola, que era la manera correcta de hacerlo, de ello se explica que cada liquidación contenía como terminación del año el 31 de diciembre y no, el último día de prestación de servicio. Es también coherente que para el 15 de diciembre del año 2011 fecha en que renuncia la trabajadora (folio 20), confesó la demandada que no pago inmediatamente la liquidación final de prestaciones sociales, que si lo hizo, pero que fue en fecha posterior.

La demandante, indicó sobre los escritos referidos, que no eran ciertos en su contenido, pese al reconocimiento de su firma, por lo que, dichos documentos como cualquier medio probatorio, debe ser valorado por el juez en consonancia con los demás elementos de prueba incorporados en el plenario, reputándose como cierto a menos que, se desvirtúe su contenido allegando pruebas **sólidas** que así lo determinen. (SL14426-2014; SL6621-2017), lo cual, no se dio en el caso de marras, pues la simple manifestación de la demandante respecto a que le “hicieron

firmar el documento” no es suficiente para determinar que lo allí consignado no es cierto.

De ser así, estaría también a su cargo, la prueba del vicio del consentimiento, al momento de la suscripción, pues el artículo 1265 del Código Civil establece:

“Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.”

Es así, como **el error, el dolo, la violencia y la intimidación**, representan o la falta conocimiento para la voluntad del individuo (en los dos primeros casos) o la carencia de libertad para lo que la persona desea (en los dos últimos casos), siendo necesario aclarar lo que a este proceso corresponde que hay error, cuando se cree estar firmando un documento diferente al que en realidad es, con un contenido que difiere de lo que materialmente sucedió.

Ninguno de las dos situaciones se encuentra acreditadas en el presente proceso, pues no basta con verificar el aspecto físico de los documentos, de los que nada puede colegirse más allá de lo probado, pues como elemento de prueba se insiste, debe valorarse en conjunto y no de manera individual, por tanto, cuentan con pleno valor probatorio en su literalidad.

Ahora, tal como se dijo en apartes anteriores en esta providencia recae sobre la parte actora la prueba de la manera en que desempeñó las labores, es decir, si era por días, o en término completo, habiendo sido confesión en su interrogatorio de parte, que no siempre trabajó tiempo completo, sino, por días, situación que si se determinó de las declaraciones de los señores Darío de Jesús Betancur, Alina María Restrepo Pérez y Francisco Eladio Osorio Quintero y quienes indicaron que la

señora Alis Marisela Ruiz Fernández no estaba todos los días en casa de la señora Restrepo Pérez, incluso, en el escrito de demanda no se hace reparo sobre la manera en que se efectuó la liquidación en los documentos a folios 14 a 19 del plenario, pues la certificación que enuncia como salario para dicho mes, la suma de \$600.000, puede tranquilamente corresponder a los días laborados en el citado periodo mensual, que puede ser igual o no a los demás. Sumado a ello, en el escrito de demanda se enunció que la asignación salarial era, el salario mínimo (fundamento factico segundo).

Se deberá por ende revocar las condenas impuestas a la señora Luz Marina Restrepo Pérez respecto al pago de las prestaciones sociales y las consecuenciales a esta como la sanción del artículo 65 del CST, lo cual, también sucede frente a la solicitud de declaración del accidente laboral, pues ninguna prueba se constata en el proceso de la existencia de éste, más allá de los dichos de la demandante, si bien no se desconoce que tuvo un infortunio que concluyó en varias incapacidades, debió probarse suficientemente el origen pretendido, y en el interrogatorio de parte sí confesó que se le pagaron todas las incapacidades a las que hubo lugar.

Se dejará incólume la condena respecto al pago de seguridad social en pensiones causados entre el 13 de enero del año 2006 y el 18 de diciembre del año 2011 con base al salario mínimo de cada año por no haberse probado con claridad los días efectivamente laborados por semana, por la confesión del salario devengado, ante el fondo que se encuentra la afiliada y previo cálculo actuarial que realice la entidad, cotizaciones que se aclara al procurador judicial de la parte actora, si tienen intereses de mora, que se cancelan al fondo pensional y no, directamente a la afiliada.

Respecto a la sanción moratoria consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, frente a la señora Luz Marina Restrepo Pérez, debe recordarse que, tiene lugar siempre y cuanto subsista la relación laboral y sólo hasta la fecha de culminación de esta, pues terminada la relación contractual entre las partes, lo procedente es, la sanción contemplada en el artículo 65 del CST, como lo detalló la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL859-2021:

“En consecuencia, respecto a las cesantías causadas durante el periodo laborado en el año 2012, no tiene razón la recurrente al invocar la imposición de la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 hasta la fecha en que se satisfaga la obligación, porque como ya se explicó corre solo hasta la data de terminación del contrato, de manera que lo que procede a partir de esta última, es la indexación de los dineros que por tal concepto debieron consignarse oportunamente, en cuanto, se repite, no se pretendió la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo.”

Considera la Sala que no existió mala fe de la señora Restrepo Pérez, pues de acuerdo a los documentos a folios 14 a 19 del proceso, las cesantías se cancelaron directamente a la trabajadora antes de la fecha límite para ello en el año siguiente, siendo pertinente confirmar la absolución por ese concepto, dado además que la trabajadora participó en tal conducta al recibir sin objeción.

Corolario a lo expuesto, se evocará parcialmente la sentencia proferida el siete (7) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) por el juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín por las razones expuestas.

Sin costas en esta instancia, ante la prosperidad parcial del recurso interpuesto.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Revocar el numeral **PRIMERO** de la sentencia respecto a la declaratoria de la terminación de la relación con justa causa por parte de la trabajadora, y dejar incólume en lo demás.

SEGUNDO: Revocar los numerales **SEGUNDO Y TERCERO** de la sentencia.

TERCERO: Confirmar los numerales **CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO**, aclarando, que respecto al numeral **CUARTO** se debe tener en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para cada año.

CUARTO: Modificar el numeral **NOVENO** reduciendo la condena en costas en primera instancia en cuantía de un salario mínimo de manera conjunta a cargo de ambas accionadas.

QUINTO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

05001310501720130154702

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d9a102243587eae7a64c9e018318cfe136b406d5b3ce39d81384095f4da54691**

Documento generado en 31/03/2023 03:11:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>